

# El renacer de la democracia en el Perú

**Aldo Olano Alor**

**E**n este artículo me he propuesto analizar no tanto el reciente proceso electoral en el cual resultó vencedor Alejandro Toledo, sino más bien explicar las causas que hicieron posible el derrumbe de la dictadura de Alberto Fujimori y su reemplazo por un gobierno transitorio conducido por el presidente del Congreso Nacional, Valentín Paniagua. Un detallado análisis de los años en los cuales se montó el fraude electoral con el cual Fujimori intentó perpetuarse en el poder será quizás el fundamento principal para entender por qué a mediados de septiembre de 2000, la situación del gobierno se volvió insostenible luego de la difusión del video en que se veía a Montesinos sobornando a un congresista de la oposición. Pienso que la permanente oposición cívica y democrática, el resurgir de los movimientos sociales luego de un largo paréntesis, se constituyó en el principal elemento para la caída de la dictadura. Sin la movilización de los jóvenes estudiantes, trabajadores y demás integrantes de la sociedad civil que cuestionaban el orden autoritario, no hubiera sido posible que el Perú disfrute nuevamente de un régimen democrático. Dejo para un próximo artículo el análisis del triunfo de Toledo en la segunda vuelta electoral realizada el 3 de junio pasado, en donde dejaré establecidos los desafíos que afronta la restaurada democracia en el Perú.

## **El derrumbe de la dictadura**

El ingeniero Alberto Fujimori asumió el gobierno del Perú por tercera vez el 28 de julio de 2000 en una elección calificada por el mismo presidente en su discurso de posesión como “legal y legítima”. Pero tan sólo dos meses después, el 16 de septiembre, decidió reducir su mandato a sólo un año, convocar a elecciones generales y dirigir un proceso de transición que debía culminar en julio de 2001. Un 75% de la población aprobó la decisión

presidencial y la oposición al irreductible Fujimori celebró en las calles limeñas la salida anticipada del 'chino'. En ese mensaje igualmente anunció la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido por su entonces socio en distintas actividades políticas y económicas y ahora reo de la justicia peruana. En noviembre de 2000, Fujimori anunció desde el Japón su retiro como Presidente y posteriormente fue destituido por el Congreso.

Vladimiro Montesinos Torres, el más importante asesor presidencial y organizador de la policía secreta del régimen, el SIN, que tuvo Fujimori durante los diez años que gobernó, huyó del país en la tercera semana de septiembre y se refugió de manera transitoria en Panamá, paraíso financiero y centro de reclusión negociada de golpistas tales como el haitiano Raoul Cedrás y el ex presidente de Guatemala Jorge Serrano. La presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a pesar de oponerse inicialmente a la presencia de Montesinos en su país solicitando asilo político, terminó aceptando la propuesta hecha por el secretario general de la OEA, César Gaviria, y distintos presidentes latinoamericanos para que lo recibiera, ya que la salida de este polémico personaje coadyuvaría al restablecimiento de la democracia en el Perú. Cuando Montesinos se enteró que la DEA estaba organizando su detención, regresó al Perú donde permaneció hasta comienzos de noviembre, volviendo a fugarse pero esta vez hacia un destino que pensó era seguro: Venezuela. Detenido en el mes de junio reciente es posible que pase el resto de sus días en la cárcel.

Las Fuerzas Armadas del Perú cerraron filas alrededor del asesor presidencial y lograron sacarlo del país en medio de la tormenta política desatada por las ilícitas actividades que se iban descubriendo, las cuales comprometían a las altas esferas del gobierno. Inmediatamente los mandos militares juraron completa lealtad a su "Comandante Supremo", es decir al presidente, y trataron de involucrarse en el proceso de transición que dirigiría el ahora prófugo ciudadano japonés, Alberto Fujimori. Lograron impedir la inmediata caída del presidente pero

la crisis mostró las fisuras existentes en el interior de los institutos armados. Por un lado, la politización y corrupción de los altos mandos y, por el otro, un generalizado descontento en los mandos intermedios por esta situación. El posterior descabezamiento de 12 generales como una de las primeras medidas del gobierno transitorio de Valentín Paniagua, y la notoria presencia de importantes mandos en actividades ilegales como tráfico de drogas y armas, ha conducido al nuevo gobierno a plantear una completa reorganización de las Fuerzas Armadas. Difícil tarea que le compete afrontar al vicepresidente y congresista David Waisman, primer ministro civil que tiene el sector defensa desde su creación en 1987.

Los acontecimientos reseñados líneas arriba nos refieren situaciones personales e institucionales que muestran la caída por colapso del régimen fujimorista tras la fraudulenta segunda reelección del presidente. Se puede afirmar que el descalabro de la dictadura se inició con un video filtrado por integrantes de la Marina de Guerra del Perú al Frente Independiente Moralizador que lidera el congresista y ahora ministro de Justicia, Fernando Olivera, en el cual de manera clara se ve a Montesinos sobornando a un congresista de la oposición para que se pase a las filas del gobierno. El video se hizo célebre ya que con su difusión el aparentemente sólido andamiaje de la dictadura comenzó a caer, dejando al descubierto el sistema político - corruptor centralizado en las más encumbradas esferas del gobierno. Desde ese momento la movilización democrática, popular y cívica no cesaría hasta lograr la salida de la dictadura.

Ahora bien, la crisis incubada de forma paciente por el accionar del gobierno entre los años 1997 y 2000 le estalló en sus manos y lo inevitable se hizo presente más rápido de lo que cualquier analista hubiera supuesto. El régimen autoritario finalmente culminaría a mediados de noviembre cuando Fujimori renunció desde el Japón a la Presidencia de la República. Posteriormente fue destituido por el Congreso y se constituyó un gobierno transitorio a cargo



de Valentín Paniagua, destacado militante de Acción Popular. Pero, ¿fue el video la causa principal en el derrumbe de la dictadura? ¿Qué otros factores contribuyeron a la renuncia y fuga del ahora encausado ex presidente? Considero que es necesario revisar algunos puntos de la estrategia gubernamental supuestamente destinados a garantizar la continuidad autoritaria.

### Los antecedentes de la (RE) reelección

Puedo afirmar que el proyecto autoritario elaborado por Fujimori y Montesinos se manifestó con claridad a mediados de 1996, cuando el Congreso de mayoría oficialista aprobó la llamada 'Ley de Interpretación Auténtica', del artículo 112 de la Constitución promulgada en 1993. Este artículo consagraba la reelección inmediata y había sido impuesto por Fujimori en la constitución elaborada por el Congreso Constituyente 'Democrático' (CCD). Recordemos que el CCD se había elegido en noviembre de 1992 luego del golpe de estado que el presidente, en asocio con Montesinos y los jefes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), donde se destacaba el general del Ejército Nicolás Hermoza, llevó a cabo en abril de ese mismo año. La nueva constitución fue aprobada por una mínima diferencia en el referéndum realizado a fines de octubre de 1993.

Los antes importantes partidos políticos como Acción Popular, el Partido Aprista y la Izquierda Unida, las fuerzas políticas que habían desempeñado destacado papel en la política peruana durante la década de los ochenta, se ausentaron de las elecciones argumentando falta de garantías para una elección realmente democrática. No hay que dejar de lado el hecho sintomático de la grave crisis del sistema de partidos sobre el cual se montaron independientes y *outsiders* al comenzar la década de los noventa, y que en el caso peruano era producto del progresivo debilitamiento de las organizaciones integrantes del sistema. El

gobierno obtuvo la mayoría parlamentaria sin problemas y así fue posible elaborar una constitución a la medida del presidente<sup>1</sup>.

Luego de la reelección de Fujimori en abril de 1995 con el 64,42% de la votación, derrotando en la primera vuelta electoral a Javier Pérez de Cuéllar, en lugar de tender puentes hacia la oposición, dedicarse a fortalecer la institucionalidad democrática en un momento de clara legitimidad política y reconocimiento internacional, el gobierno optó por endurecer su administración. Con la 'Ley de Interpretación Auténtica', promovida por el parlamentario oficialista Carlos Torres y Torres, se "interpretó" la norma constitucional que permitía la reelección inmediata por una sola vez utilizando un nimio argumento legal. En la ley se estableció que Fujimori había sido elegido por primera vez con la nueva Constitución en 1995, por lo cual no era aplicable la restricción al entonces presidente. Así se permitía una nueva reelección. El Tribunal de Garantías Constitucionales declaró la ley como inaplicable y el gobierno respondió a través del Congreso, destituyendo a los tres magistrados que votaron en contra de la "interpretación auténtica". Se confirmaban así los ímpetus dictatoriales del triunvirato en el poder, Fujimori, Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos, constituidos ahora sí como organización dedicada al saqueo del erario público y otras actividades ilegales<sup>2</sup>.

Quizá es importante introducir en forma breve el papel de la OEA en la crisis peruana. Sin haber de por medio un acuerdo con los directamente comprometidos en la política nacional, sobre todo los partidos de oposición, Fujimori pactó un retorno a la democracia con la comunidad internacional en la Reunión de Cancilleres de la OEA, realizada en Bahamas a fines de mayo de 1992. En ese encuentro se acordó que antes de fin de año el gobierno del Perú debería organizar elecciones como procedimiento esencial para recuperar la democracia. No se tocaron temas por igual

<sup>1</sup> Tanaka;1998:201-247

<sup>2</sup> Sobre las características mafiosas adquiridas por el Fujimorismo, se recomienda el excelente trabajo de Carlos Iván Degregori (2000), sobre todo el capítulo 1.

importantes en todo el proceso destinado a reponer un régimen democrático: la independencia de los poderes, neutralidad de las Fuerzas Armadas, salida de los funcionarios de alto nivel nombrados por decreto gubernamental, medios de comunicación libres. Yendo en contra de la resolución 1080 aprobada en Santiago de Chile el año anterior, la cual obligaba a la imposición de sanciones para cualquier quebranto del orden constitucional, lo pactado en la Reunión de Cancilleres significó en la práctica avalar la salida golpista como resolución de la crisis peruana. Peor aún, se le asignó a Fujimori, el mismo que había dado el golpe de estado, la responsabilidad de conducir lo que en forma ingenua se planteó como un proceso de restauración de la democracia<sup>3</sup>.

Ahora bien, en los meses que siguieron a la "interpretación auténtica" se intervinieron el Poder Judicial y el Ministerio Público, mediante sendas comisiones ejecutivas, las cuales se encargaron de nombrar jueces y fiscales adeptos al gobierno. Al mismo tiempo, se reorganizó el sistema electoral creando nuevas instituciones y copando con funcionarios oficialistas el máximo tribunal electoral del país. Por último, desde el Estado se puso en marcha la maquinaria reeleccionista destinada a garantizar el triunfo presidencial. Una prueba de la voluntad gubernamental por afianzarse en el poder fue la organización de un nuevo movimiento político, 'Vamos Vecino', por parte de personajes muy cercanos al presidente. Entre ellos se destacaba el ex ministro de Agricultura, asesor y amigo personal del presidente, Absalón Vásquez, máximo líder del movimiento y quien a inicios del 2000 se vería involucrado en el escándalo del millón de firmas falsificadas para inscribir la candidatura de Fujimori. La tarea a que se vio abocado Vamos Vecino fue ganar la mayor cantidad de concejos distritales y provinciales en las elecciones municipales llevadas a cabo en noviembre de 1998, para después ponerlos al servicio de la reelección. Igualmente, permitía medir fuerzas en el ámbito nacional con Somos Perú, movimiento fundado por el exitoso alcalde de Lima y en ese momento alternativa

presidencial de la oposición democrática, Alberto Andrade.

Igualmente, utilizando el aparato y los recursos del Estado, Fujimori y Montesinos se dedicaron a la tarea de comprar todo aquello que pudiera ser utilizado a favor de la candidatura presidencial. Políticos de la oposición, alcaldes y parlamentarios, empresarios nacionales y extranjeros, artistas y medios de comunicación sucumbieron a esta especie de poder neototalitario. En aras de continuar la tarea se trató de pervertir tanto la actividad política como la moral de aquellos que desafiaban el orden autoritario. Entre la actividad corruptora adelantada por el Estado se destaca lo sucedido con los medios de comunicación. El control de estos se volvió un objetivo impostergable en la estrategia por fortalecer el autoritarismo, ya que en la era de la política mediática es posible construir desde los medios símbolos y fortalecer discursos que sirvan de manera exclusiva a una persona o proyecto.

En este caso se optó por el envilecimiento de la programación televisiva y radial con la complicidad de los propietarios, los cuales abrumados por una difícil situación económica terminaron por entregar su independencia. Es por eso que en los más importantes medios de comunicación se tuvo desde 1997 el imprevisto monopolio de la 'techno cumbia', el éxito de los talk shows y gossip shows junto al grotesco humor de los 'cómicos ambulantes'. No es gratuito que en la campaña electoral de 2000, Fujimori se dedicara con sus candidatos a la vicepresidencia a bailar la cumbia 'El baile del chino', o que Laura Bozzo en su diario programa ensalzara la labor de Fujimori y Montesinos presentándolos como los salvadores de la patria. Esto sin contar los noticieros televisivos, los cuales dibujaban un país donde no había más políticos que Fujimori y sus voceros. A todo esto se sumó la irrupción de la llamada 'prensa chicha' con nombres tan alucinantes como 'El Chino', 'El Tío' y 'La Chuchi', dedicándose todos ellos de manera sistemática a la destrucción de la dignidad y la moral no sólo de los integrantes de la oposición política, que fueron

<sup>3</sup> Olano;1999



su objetivo principal, sino de la sociedad en su conjunto. Lo perversamente útil que resulta aquí la manipulación de los medios se demostró con la formación de la opinión pública en el Perú durante esta época<sup>4</sup>.

Fujimori manifestó su voluntad de ser de nuevo presidente, el 28 de diciembre de 1999. Esta decisión significaba una “actitud de sacrificio” ya que había “... revisado detenidamente a los otros candidatos” y no encontraba uno solo capaz de “... continuar la obra iniciada 10 años atrás”. A partir de ese momento inició el *rush* final de la carrera iniciada en 1996 en aras de mantenerse en el poder, sin tomar mucho en cuenta la observación internacional de la que era objeto como también la creciente oposición popular y democrática a su gobierno. Por ejemplo, la Misión de Observadores de la OEA liderada por Eduardo Stein se encontraba ya en Lima y, a diferencia de anteriores misiones que se habían hecho presentes en el momento de la elección, aquella estaba dedicada a evaluar el proceso electoral en su totalidad.

Ahora bien, quisiera dejar establecido que un elemento en realidad importante en la configuración de la crisis que finalmente acabaría con el régimen, fue el de la firme movilización popular. La sociedad y la oposición política estaban activadas desde mediados de 1997, sobre todo cuando el Congreso cercenó el derecho que los ciudadanos tuvieron para manifestarse sobre la nueva candidatura de Fujimori. El referéndum por iniciativa ciudadana, casi dos millones de firmas recolectadas por la organización cívica Foro Democrático, se cayó en el Congreso debido a la negativa de la mayoría oficialista por darle curso. Obviamente, hubo un previo cambio de la norma constitucional que legitimaba la participación ciudadana a través de los mecanismos de la democracia directa, por una ley en la cual se imponía el filtro congresal para cualquier iniciativa procedente de la sociedad. La respuesta a la decisión del Congreso fue la inmediata movilización de importantes sectores de la sociedad, sobre todo jóvenes estudiantes

del país entero y sindicatos de trabajadores como el de maestros y obreros de construcción civil. La oposición movilizada se activó aún más cuando se descubrió el fraude en la noche del 8 de abril de 2000.

La falsificación de un millón de firmas con el objetivo de inscribir la alianza electoral Perú 2000, fue un hecho que comprometió de manera abierta a integrantes del gobierno, parlamentarios en ejercicio y funcionarios de los organismos electorales. Denunciada por el prestigioso diario El Comercio, la falsificación de las firmas fue otro de los mayúsculos escándalos que estallaron en plena campaña electoral. El caso sacudió los cimientos gubernamentales pero no logró cambiar la actitud de los comprometidos en forma directa con el delito. Más bien los denunciantes terminaron denunciados, el Tribunal Electoral aprobó la inscripción de Fujimori y tanto jueces como fiscales venales archivaron los procesos judiciales iniciados contra la ilegal candidatura.

### **Adelante con el ‘Plan B’**

Los planes de la dictadura se vieron afectados cuando se difundieron los primeros resultados de la elección presidencial. Las encuestas a boca de urna dieron casi todas una votación del 49% a Alejandro Toledo, resultados que prácticamente le permitían ganar la Presidencia de la República en primera vuelta con una diferencia de 8 puntos sobre su más cercano competidor, Alberto Fujimori. Importantes sectores de la ciudadanía celebraron el triunfo de la oposición democrática, pensando que el gobierno se iría reconociendo su derrota electoral. Se equivocaron. De inmediato se puso en marcha el plan para cambiar los resultados. Los canales de televisión suspendieron hacia las 4:30 de la tarde toda información referente al proceso. Aparecieron en escena viejas películas de Cantinflas y gastados capítulos de ‘El chavo del ocho’, como si la farsa a la cual se había abocado el gobierno desde ese momento debiera ser tratada como una comedia.

<sup>4</sup> Degregori; ob.cit.:97 y ss

El control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la manipulación del software hizo posible que los resultados se voltearan hacia las ocho de la noche. Panamericana Televisión, el único canal que seguía transmitiendo resultados, explicó el error en que habían incurrido las encuestas a boca de urna al anunciar como ganador a Toledo, ya que los resultados oficiales daban a Fujimori como el ganador con aproximadamente 9 puntos sobre Toledo. ¡Las encuestas habían errado en casi 17 puntos! en un país donde normalmente se sabía quién era elegido presidente al momento de cerrarse las mesas de votación. Esa misma noche, una gigantesca movilización hacia el Palacio de Gobierno fue duramente reprimida y en los días siguientes aquella no cesó, más aún cuando se descubrieron las artimañas gubernamentales para legitimar el fraude.

Los intentos de la ONPE por hacer ganar a Fujimori en la primera vuelta, 49.86% de la votación según los resultados finales dados casi 10 días después de la elección, se frustraron debido a la confluencia de múltiples factores. En primer lugar, la oposición de la mayor parte de los partidos políticos y movimientos independientes que habían competido en las elecciones, tales como el Partido Aprista, Acción Popular, Somos Perú, Solidaridad Nacional y Perú Posible, liderados en forma unitaria por Alejandro Toledo. En segundo lugar, la inmediata y masiva resistencia ciudadana al fraude electoral y, por último, la categórica declaración del Jefe de la Misión de Observadores de la OEA quien en su informe calificó el proceso como lleno de irregularidades. Igualmente, se opusieron la Comunidad Europea, Estados Unidos y Canadá, exigiendo todos ellos una segunda vuelta electoral entre Fujimori y Toledo. El gobierno sin mucho margen de maniobra debido a la movilización ciudadana y la observación internacional, se vio obligado a ceder con la realización de la segunda vuelta pero persistió en su errada conducta de dirigir el proceso sin cambiar el estado de cosas existente.

De inmediato se puso en marcha la estrategia destinada a garantizar el triunfo de Fujimori en la segunda vuelta. La campaña de desprestigio contra Toledo se inició utilizando la 'prensa chicha' y los talk shows como punta de lanza de la estrategia. Acusaciones de "terrorista" por haber liderado la movilización contra el fraude, de "marido infiel" supuestamente por tener una hija fuera del matrimonio y otros calificativos destinados a doblegar no sólo a Toledo sino a la oposición democrática en su conjunto. La guerra sucia como arma para quebrar voluntades pero que al final de cuentas revirtió en contra de quien la utilizó.

Ahora bien, tanto la oposición como la comunidad internacional sugirieron algunos cambios en la organización de la segunda vuelta, con la finalidad de tener mayores garantías en el proceso. Entre otras cosas se planteó la necesidad de supervisar el funcionamiento del software utilizado por la ONPE en el conteo de los votos, realizar una depuración del padrón electoral eliminando a los difuntos y militares inscritos en forma ilegal, además de postergar la fecha de la segunda vuelta para la primera quincena de junio y así tener el tiempo suficiente para completar los cambios requeridos. Del mismo modo, se sugirió la participación de instituciones en la organización del proceso y que no estuvieran adscritas al designio gubernamental, como por ejemplo la Asociación Civil Transparencia o la Defensoría del Pueblo. El gobierno se negó a poner en práctica estas sugerencias argumentando que no podía intervenir debido a la "independencia" y "autonomía" de que gozaban los organismos electorales, los cuales decidían de acuerdo con las leyes establecidas. En consecuencia, Alejandro Toledo renunció a participar y la Misión de Observadores de la OEA decidió retirarse del país. Fujimori quedó como candidato único y en el mejor estilo de los dictadores latinoamericanos de décadas pasadas, "ganó" la segunda vuelta realizada el 28 de mayo del 2000 con cerca del 80% de la votación.



La (RE) reelección gozaba de un manto de ilegitimidad que difícilmente podía ser aceptado por cualquier observador o analista político internacional. Pero de manera sorpresiva, la OEA, en su reunión de Cancilleres realizada a comienzos de junio en la ciudad de Windsor, Canadá, decidió avalar la ilegal reelección a pesar del informe de la Misión de Observadores que cuestionaba en forma dura el proceso electoral iniciado en enero de 2000. Con el decidido apoyo de Brasil, México y Venezuela, el gobierno peruano logró evadir una sanción internacional enmarcada en la resolución 1080, ya que los estatutos de la OEA consideran que este tipo de sanciones debe ser aprobada de manera unánime por los países miembros. El gobierno peruano se comprometió a llevar adelante una serie de reformas al orden vigente, los cuales serían negociadas con la oposición y supervisadas por la OEA para así fortalecer la “institucionalidad democrática”.

### **Poseción, fuga y transición**

El 28 de julio de 2000, Alberto Fujimori asumió el mando en medio del aislamiento internacional y la movilización de la oposición democrática. El humo de los gases lacrimógenos utilizados por la policía para disolver las manifestaciones en contra del ilegal tercer mandato presidencial y el incendio de importantes edificios de instituciones públicas eran el telón de fondo sobre el cual emergía la deteriorada figura del presidente. El candidato ‘derrotado’ en la segunda vuelta, Alejandro Toledo, convocó a la ciudadanía entera a pronunciarse contra la perpetuación de la dictadura, organizando la más grande manifestación social y política que se haya visto en el Perú en tiempos recientes. La Marcha de los Cuatro Suyos se constituye, por eso, en un elemento fundamental para entender la derrota política de la dictadura ya que con ella quedó demostrado el hartazgo de la población hacia una forma de gobierno sustentado en la prepotencia, la arbitrariedad y el despotismo.

Ahora bien, es importante señalar que a mediados de julio se produjo un acontecimiento que vino a enrarecer aún más el ambiente político. En los días previos a la toma de posesión, el Perú fue sorprendido por la mayoría que el gobierno obtuvo en el Congreso, producto de un fenómeno que se conoció como el ‘transfuguismo’. Congresistas elegidos en las listas presentadas por los partidos de oposición se pasaban a las filas del oficialismo sin ningún tipo de explicaciones. Si con la manipulación de los resultados obtenidos en la votación congresal el gobierno había obtenido 52 parlamentarios de un total de 120, el fenómeno ya mencionado llevó dicha cantidad a 62 y en la elección de las mesas directivas pasaron a ser 75. Mayoría absoluta que, como quedó demostrado más adelante, fue producto de la compra de conciencias. El Congreso quedaba sumamente desprestigiado antes de iniciar sus funciones legislativas y era obvio que se había constituido en una institución sumisa a la voluntad gubernamental.

Actuando sobre la base de los hechos consumados, el gobierno trató de recuperar su deteriorada imagen internacional recurriendo al fácil expediente de mentir sobre un aspecto que de manera directa comprometía la seguridad de la región. A fines de agosto, justo el día en que se iniciaba el diálogo entre gobierno y oposición mediado por la OEA, Fujimori, Montesinos y los altos mandos militares y policiales anunciaron el desbaratamiento de una red internacional de traficantes de armas a través de la Operación Siberia. En esta red, según la denuncia gubernamental, estaban comprometidos altos funcionarios del gobierno de Jordania y las FARC: las armas eran transportadas en aviones ucranianos y lanzadas en los territorios donde opera la guerrilla más fuerte de Colombia. Los integrantes de la coalición autoritaria argumentaron que gracias al trabajo de inteligencia realizado por el SIN y mandos militares, el gobierno peruano demostraba su compromiso en el combate contra el terrorismo internacional

<sup>5</sup> Cotler;2000:69 y ss.

y el narcotráfico en la región<sup>5</sup>.

Pero sucedió lo imprevisible. El gobierno jordano, aliado estratégico de EE.UU. en los asuntos de seguridad en el Medio Oriente, demostró con documentos que las armas habían sido oficialmente vendidas a las FFAA del Perú. La venta se hizo previo informe a la CIA, organismo que en última instancia autorizó la transacción comercial. Las armas nunca llegaron a las instalaciones militares peruanas y más bien se comprobó que en una irregular triangulación, el Ejército peruano se las había entregado a las FARC. El gobierno de Colombia protestó airadamente y Vladimiro Montesinos, hasta ese momento consentido de la comunidad de inteligencia norteamericana, cayó en desgracia ante sus jefes superiores. Aquí es donde hay que ubicar la importancia del video propalado el 14 de septiembre por Fernando Olivera, el cual se constituyó en el detonante de la crisis que terminó por hundir a la dictadura. En la era de la política mediática, tan bien utilizada por el gobierno para someter oposición y sociedad a sus intereses, una filmación clandestina y su propagación por el único canal de televisión que mantenía independencia informativa, se constituyó en el acontecimiento que le cambiaría por completo el curso de la historia al proyecto autoritario.

La imagen internacional del gobierno mejoraría si “se lograba una mayoría de 70 y 75 parlamentarios... sólida y pensante...” le argumentaba Montesinos al parlamentario de Perú Posible, Alberto Kouri, mientras le entregaba 15.000 dólares para que cambiara de partido. El video dio la vuelta al mundo y enseguida se observaron los pies de barro sobre los que se había levantado la institucionalidad autoritaria. Las diferencias surgidas a raíz de la divulgación del video llevaron a la ruptura entre los integrantes del pacto autoritario e inmediatamente se trató de buscar una salida ordenada a la crisis. El 16 de septiembre, Fujimori convocó a un nuevo proceso electoral en el que no participaría, pensando quizá que al conducir él

la transición se ahorraría futuros problemas políticos y judiciales. Así mismo, ordenó la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional, sin prever que la ausencia de su principal asesor lo dejaba como una entelequia en manos de un futuro completamente previsible: su destitución y posterior encausamiento una vez que el Poder Judicial recuperara su independencia.

El presidente quedó vacío, sin dirección, y a partir de ese momento sólo se preocupó por encontrarle una salida a su complicada situación personal. La encontró en una cumbre presidencial de la APEC realizada en Kuala Lumpur, Malasia, iniciando un viaje sin retorno al país que había gobernado durante 10 años. La última escala de su larga travesía lo condujo al país de sus ancestros donde permanece gracias a la hace poco adquirida nacionalidad japonesa. Esto impide, por ahora, su extradición al Perú. Desde Tokio y vía fax renunció a seguir ocupando la Presidencia de la República del Perú luego de haber hecho hasta lo indecible para mantenerse en ella. Destituido en el Congreso por “incapacidad moral”, el régimen político que tan obstinadamente construyó en los años que se mantuvo al frente del ejecutivo, se desmoronó cual castillo de naipes. Vicepresidentes y ministros renunciaron sin tener al frente la persona que los había nombrado. El soporte político del tercer gobierno de Fujimori, la alianza electoral Perú 2000, que había comenzado a desintegrarse cuando se difundió el video, puso punto final a sus actividades sin dejar rastros de ningún tipo. Si parafraseamos a Francois Furet podemos decir del fujimorismo que como régimen político: “... su rápida disolución no deja nada en pie: ni principios, ni códigos, ni instituciones; ni siquiera una historia... De entre los escombros... no aparecen ni dirigentes dispuestos al relevo, ni verdaderos partidos, ni nueva sociedad, ni nueva economía. Sólo se puede ver una (sociedad peruana) atomizada... (el fujimorismo) termina en una especie de nada...”<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Furet;1996:10





Valentín Paniagua fue nombrado presidente provisional organizando su gobierno con personajes procedentes de distintas tiendas políticas, asumiendo la tarea de llevar adelante un proceso electoral en medio de condiciones bastante adversas. Logró llevar a buen término tamaña empresa. La mesa de diálogo auspiciada por la OEA se desactivó sin haber adquirido real trascendencia en la restauración

de la democracia en el Perú. Más aún, la imagen de esta institución internacional quedó sumamente deteriorada entre la opinión pública peruana, ya que es percibida como encubridora de los desvaríos acontecidos en el Perú durante la dictadura fujimorista. Los partidos políticos reiniciaron sus actividades con las miras puestas en las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas el 9 de abril pasado y el Perú ha comenzado, una vez más, un proceso que debe permitirle encontrar su viabilidad democrática. Ojalá pueda encontrar el camino del que fue desviado durante los últimos 10 años.

## Bibliografía

COTLER, Julio. (2000) "La gobernabilidad en el Perú: entre el autoritarismo y la democracia" en Julio Cotler y Romeo Grompone: El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario. IEP ediciones, Lima

DEGREGORI, Carlos Iván. (2000) La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. IEP ediciones, Lima.

FURET, Francois. (1996) El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX. Fondo de Cultura Económica, México. Primera reimpression.

OLANO, Aldo. (1999) "Las relaciones cívico-militares y la caída de la democracia en el Perú" en OASIS 98, Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), Universidad Externado de Colombia.

TANAKA, Martín. (1996) Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú. IEP ediciones, Lima.